
Sentencia impugnada:	Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 15 de noviembre de 2018.
Materia:	Penal.
Recurrentes:	Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán.
Abogados:	Licdos. Robert Encarnación, Johann Francisco Reyes Suero y Raykeny de J. Rodríguez R.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Presidente; Fran Euclides Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 31 de julio de 2019, años 176° de la Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por Domingo Capellán Fernández, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2407689-9, domiciliado y residente en la avenida Imbert núm. 25, barrio Puerto Rico, de la ciudad de La Vega; y Antonio Agustín Cornelio Capellán, dominicano, mayor de edad, soltero, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la avenida Imbert núm. 25, barrio Puerto Rico, de la ciudad de La Vega, ambos reclusos en la Cárcel Pública de La Vega, imputados, contra la sentencia núm. 203-2018-SEN-00401, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 15 de noviembre de 2018, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al Juez presidente dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lcdo. Robert Encarnación, por sí y por el Lcdo. Johann Francisco Reyes Suero, defensor público, en la formulación de sus conclusiones en representación de Domingo Capellán Fernández, parte recurrente;

Oído el dictamen del Procurador General Adjunto al Procurador General de la República, Lcdo. Carlos Castillo Díaz;

Visto el escrito del memorial de casación suscrito por el Lcdo. Johann Francisco Reyes Suero, defensor público, quien actúa en nombre y representación de Domingo Capellán Fernández, depositado en la secretaría de la Corte *a qua* el 28 de diciembre de 2018, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto el escrito del memorial de casación suscrito por el Lcdo. Raykeny de J. Rodríguez R., defensor público, quien actúa en nombre y representación de Antonio Agustín Cornelio Capellán, depositado en la secretaría de la Corte *a qua* el 9 de enero de 2019, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 1029-2019, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 26 de marzo de 2019, que declaró admisibles en cuanto a la forma, los recursos de casación interpuestos y fijó audiencia para conocerlos el día 22 de mayo de 2019 fecha en la cual se difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales de derechos humanos de las cuales la República Dominicana es signataria;

las decisiones dictadas en materia constitucional; la norma cuya violación se invoca; las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

La presente sentencia fue votada en primer término por el Magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, a cuyo voto se adhirieron los Magistrados Francisco Antonio Mena Jerez, María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

- a) el 7 de julio de 2017, la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, Lcda. Bony Esther Suriel G., presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra Yunior Manuel Capellán, Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 267, 295, 296, 297 y 298 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del hoy occiso Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo;
- b) que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público emitiendo auto de apertura a juicio en contra de los imputados, mediante la resolución núm. 595-2017-SRES-00281, el 20 de junio de 2017;
- c) que para la celebración del juicio resultó apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el cual dictó sentencia núm. 970-2018-SSSEN-00033, el 27 de marzo de 2018, cuyo dispositivo copiado textualmente establece lo siguiente:

“PRIMERO: Declara no culpable al ciudadano Yunior Manuel Capellán de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano por insuficiencia probatoria; en consecuencia, se dicta sentencia absolutoria a su favor; SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano Antonio Agustín Cornelio Capellán (a) Agustín, de violar los artículos 265, 266, en perjuicio del hoy occiso Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo, en consecuencia se le condena a cumplir una pena de treinta (30) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en el CCR, El Pinito, La Vega; TERCERO: Declara culpable al ciudadano Domingo Capellán Fernández (a) Chow, de violar los artículos 265, 266, 59, 60, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano en perjuicio del hoy occiso Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo; en consecuencia, se le condena a cumplir una pena de veinte (20) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en CCR, El Pinito, La Vega, por entender que su conducta se ajusta a la complicidad del hecho realizado por el ciudadano Antonio Agustín Cornelio Capellán; CUARTO: En cuanto a la querella con constitución en actor civil, se rechaza por no cumplir con los requisitos de fondo exigidos por la normativa procesal penal; QUINTO: Declara el presente proceso libre de costas, tanto respecto al imputado absuelto como con respecto a los condenados por haber sido representados por la defensa pública”;

- d) no conforme con la referida decisión, los imputados recurrentes Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán, interpusieron recursos de apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 203-2018-SSSEN-00401, objeto del presente recurso de casación, el 15 de noviembre de 2018, cuyo parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente:

“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos el primero, por el imputado Domingo Capellán Fernández, representado por Johann Francisco Reyes Suero; y el segundo, por el imputado Antonio Agustín Cornelio Capellán, representado por Biemnel Francisca Suárez Peña, en contra de la sentencia número 970-2018-SSSEN-00033 de fecha 27/3/2018, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega; en consecuencia, confirma la decisión recurrida; SEGUNDO: Compensa las costas generadas en esta instancia por los imputados Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán, haber sido asistidos por defensores públicos; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;

Considerando, que el recurrente Domingo Capellán Fernández, propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios:

“Primer Medio: Inobservancia de disposiciones constitucionales y legales por ser la sentencia manifiestamente infundada y por carecer de una motivación adecuada y suficiente, (artículo 426.3.); **Segundo Medio:** Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años, (artículo 426.1)”;

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación propuestos por el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:

“La Corte a quo realiza un “análisis” aislado de la sentencia atacada, es decir, da su decisión al margen de lo que fueron los méritos reales del recurso de apelación presentado por el imputado Domingo Capellán Fernández, limitándose simplemente a verificar los aspectos estructurales y de forma de la sentencia impugnada, aspectos estos que nada tienen que ver con los fundamentos reales del recurso de apelación presentado, dejando de lado los méritos reales del indicado recurso de apelación escrito, de los elementos de pruebas que le sirven de sustento a la decisión emitida por el tribunal de primer grado, esto fundamentado principalmente por el hecho de haber sustentado el Tribunal Colegido su sentencia sobre la base de pruebas que no tenían conexión alguna para llegar a la conclusión de que Domingo Capellán Fernández sea autor de complicidad de asesinato V asociación de malhechores. Incurriendo así dicho juez en falta de estatuir. Es por lo antes expuesto que consideramos que la Corte a qua al rechazar el indicado medio no hizo una correcta administración de justicia, sobre todo porque no le garantizó al hoy recurrente su derecho a un recurso de manera efectiva, ya que ello era necesario realizar un examen integral del caso y de la sentencia, y no “examen” superficial como lo hizo en el presente caso. De igual modo, consideramos que la decisión que a través del presente recurso se ataca fue dada en franca inobservancia de lo dispuesto por el citado artículo 24 del CPP, puesto que rechazar el recurso de apelación presentado por el imputado, y sobre la base de comprobación de hecho fijada en la sentencia lo condena a cumplir una pena de 30 años, la Corte a quo utilizó una formula genérica que en nada sustituye su deber de motivar. Entendemos que era obligación de la Corte a quo dar respuesta, de, manera precisa y detallada, a cada uno de los aspectos señalado por el hoy recurrente en los medios de impugnación propuestos, no solo en el escrito recursivo, sino también al medio propuesto de manera oral en audiencia, por lo que al no hacerlo su decisión es manifiestamente infundada por haber inobservado el tribunal lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana y el artículo 24 del Código Procesal Penal, incurriendo así en falta en la motivación de la sentencia lo cual violenta el derecho de defensa del procesado así como su derecho a ser juzgado con estricto apego a todas las garantías que conforman el debido proceso de ley. Así mismo, la Corte también debió de establecer porque razón, al acoger el recurso de apelación, dicta directamente la sentencia del caso y condena al imputado, sin previamente establecer por qué toma esta decisión y no ordena la celebración total de un nuevo juicio tal y como lo solicitó el abogado del recurrente. Esta situación también constituye una limitante al derecho a recurrir de nuestro representado ya que no permite que el tribunal encargado de ejercer el control y revisar la legalidad y validez de las argumentaciones del tribunal a quo puedan verificar con certeza si estas se ajustan o no a lo establecido por la norma, quedando la sentencia huérfana de razones y base jurídica que la sustente. Es por lo antes expuesto que consideramos que la sentencia dictada por la Corte a qua es infundada y carente de base legal, por lo que procede acoger en todas sus partes el recurso de casación presentado por el hoy recurrente”;

Considerando, que por su parte, el recurrente Antonio Agustín Cornelio Capellán, propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio de casación:

“Único Medio: Inobservancia de disposiciones constitucionales, artículos 68, 69 y 74.4 de la Constitución y legales, artículos 14, 25, 172, 333 y 339 del CPP y 405, 265, 266 y 266 del Código Penal Dominicano, por ser la sentencia manifiestamente infundada y carecer de una motivación adecuada y suficiente, (artículo 426.3)”;

Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto por el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:

“A que fue alegado por ante el Tribunal a quo como medios del recurso de apelación el siguiente motivo, falta de motivación de la decisión, art. 417 CPP, todo esto a raíz de que el señor Antonio Agustín Cornelio Capellán fue

condenado a una pena de 30 años por supuesta violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 298 y 302 del Código Penal Dominicano. A que ha de destacarse que desde que se le impuso la medida de coerción al imputado, el mismo reconoció haber tenido participación en los hechos imputados, y así fue sostenido en cada etapa del proceso, aunque como se alegó tanto en la etapa de juicio como en la audiencia sobre el recurso de apelación de dicha sentencia, dichos hechos no se suscitaron de la forma como estableció el Ministerio Público, entiéndase con premeditación y asechanza. Por un lado se pudo demostrar en el tribunal de juicio que el imputado no tenía ningún problema personal con el occiso, sino mas bien, como familiares del occiso ya que estos problemas eran viejos de alrededor del año 2006, situación demostrada por los testigos del Ministerio Público y por la propia versión del imputado, hechos que fueron argumentados en el recurso de apelación y que la Corte a qua ha inobservado, como se pudo verificar entonces, la señora Ivelisse del Carmen Roque Abreu, sostuvo en el juicio que el imputado Antonio Agustín Cornelio Capellán, no tenía inconvenientes con su hermano (occiso), sino más bien con sus primos. Por otro lado su declaración resultó ser imprecisa a los fines de determinar la premeditación y la asechanza ya que no fue testigo presencial del hecho y que en consecuencia no había justificación para la materialización de un asesinato cuando no existían conflictos entre la víctima (occiso) y el imputado. Hechos estos que la Corte a qua desnaturaliza y confirma la sentencia recurrida. En el mismo sentido, dispuso la señora Estefani Esbangelina Delgado Bueno, sosteniendo que un primo de él (occiso) tenía problemas con lo que cometieron el hecho, el tribunal de primer grado al igual que la Corte de Apelación, sostienen que la premeditación y asechanza derivó de que los imputados cometieron el hecho, ya que el occiso y su hermana fueron a poner una denuncia a la policía, que resulta que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Antonio Agustín Cornelio Capellán, no hace constar dicha denuncia, por demás resulta contradictorio que si el occiso y la víctima no tenían problemas previos, la víctima procediera a interponer denuncia en su contra ya que no se justificaba. Por tanto se verifica que en el caso de la especie cuando la Corte a qua ratifica la sentencia en contra de Antonio Agustín Cornelio Capellán, por asesinato incurrió en falta de motivación, ya que no se realiza un análisis de las normas invocadas, entiéndase las previsiones de los artículos 297, 298 del Código Penal Dominicano, por lo que la sentencia recurrida debe ser casada. Por otra parte, fue sostenido por ante la Corte a qua, la modificación de la pena impuesta, así como la modificación de la calificación jurídica de los artículos 265, 266, 295, 296, 298 y 302 por los artículos 321, 326 del Código Penal, a favor del imputado Antonio Agustín Cornelio Capellán, todo esto atendiendo a la falta de elementos de pruebas que demostraran la premeditación y la asechanza, además tomando en consideración la versión de los imputados, los cuales sostuvieron durante todo el proceso que el arma con la cual se disparó a la víctima, esta última la tenía en su posesión para utilizarla en contra de Antonio Agustín Cornelio Capellán, situación esta que provocó que el imputado se defendiera contra dichas agresiones";

En cuanto al recurso de Domingo Capellán Fernández:

Considerando, que los fundamentos que integran el primer motivo de impugnación propuesto por el recurrente Domingo Capellán Fernández, en su escrito de casación, establece que la Corte a qua al momento de examinar los medios de apelación incoados ante ella, solo se limitó a hacer un examen superficial y estructural de la decisión del tribunal de juicio, sin llegar a analizar de manera íntegra el caso, ya que según afirma, la sentencia atacada, estaba sustentada por pruebas que no tenían conexión para condenarlo como autor de complicidad de asesinato y asociación de malhechores;

Considerando, que del estudio detenido de la decisión impugnada se pone de manifiesto que la Corte a qua al confirmar la sentencia de juicio, lo hizo en razón de la certeza extraída de las declaraciones de los testigos aportados por el órgano acusador, quienes de forma coherentes describieron las circunstancias en que se consumó el ilícito por el que dicho reclamante fue condenado por el tribunal de primer grado, verificándose que dicho recurrente, fue la persona que infirió las heridas de arma blanca para que el hoy occiso Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo, estuviera indispuerto y así permitir que el imputado Antonio Agustín Cornelio Capellán (a) Agustín le infiriera las heridas de bala que le produjeron la muerte, lo cual se corrobora en toda su extensión con los restantes medios de prueba, como la documental y pericial, coincidiendo en datos sustanciales, como el modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos;

Considerando, que al ser comprobados los hechos e imputaciones que le fueron endilgados a la persona del

hoy recurrente Domingo Capellán Fernández, y correctamente refrendados por el tribunal de Alzada, esta Sala ha podido advertir que dicho razonar no se realizó de manera aislada, como tampoco de forma superficial, como pretender hacer valer el recurrente, sino sobre la base de medios probatorios valorados en su justa medida; que lejos de ser un examen a la estructura de la sentencia, esa Alzada pudo validar que la ponderación del tribunal de juicio al fardo probatorio, está ajustada al escrutinio de la sana crítica, es decir, a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; esto es, conforme a las reglas del correcto entendimiento humano, por vía de consecuencia, constituyeron los medios por los cuales se corroboraron los aspectos sustanciales de la acusación, y así dar por probada la misma; en ese orden de cosas, no puede estimarse como gravamen para casar la sentencia impugnada los alegatos del recurrente en ese sentido;

Considerando, que se hace prudente establecer que el juez de juicio, analiza los interrogatorios, contra interrogatorios a la luz de la inmediatez, la contradicción, por lo que del contraexamen, y de todas las herramientas de litigación que reglan el juicio, los testimonios se convierten, luego de pasar por todos estos filtros, en un medio de prueba idóneo y efectivo, e incluso, refrendados, por el tribunal de Alzada, al ser reevaluados, lo que hace que los alegatos, como en la especie, lo establece el recurrente ante esa sala, devengan en insostenible, por haber pasado dichas declaraciones, por un tamiz que las hacen jurídicamente válidos, por consiguiente, el alegato que se examina se desestima;

Considerando, que continúa alegando el recurrente, que la Corte *a qua* utilizó una forma genérica para contestar sus reclamos, que, según afirma, en nada sustituye su deber de motivar, inobservado así, las disposiciones contenidas en el artículo 24 del Código Procesal Penal;

Considerando, que contrario a lo que arguye el recurrente, del análisis de la sentencia recurrida se evidencia que los jueces de la Corte *a qua* aportaron motivos suficientes y coherentes que justifican el fallo impugnado, tal y como se hizo constar *ut supra*, ya que la Alzada tuvo a bien comprobar que cada elemento probatorio, que en la instancia correspondiente fue evaluado y sopesado, construyó sin lugar a dudas, la participación activa del hoy recurrente en el deceso del ciudadano Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo, y para dar aquiescencia a dicho razonamiento y justificar su decisión, la Corte *a qua* ofrece motivos sustentado en derecho y jurídicamente aceptables; en el caso, la sentencia impugnada lejos de estar afectada de un déficit de fundamentación, como erróneamente alega el recurrente, la misma está suficientemente motivada y cumple con los patrones motivacionales que se derivan del artículo 24 del Código Procesal Penal; por consiguiente, procede rechazar el medio de casación que se examina;

Considerando, que en su segundo y último medio de casación, el recurrente dirige su queja a establecer que la sentencia emanada por la Corte *a qua*, se contraen varios aspectos y motivos, toda vez que, según afirma, no se encuentra subsumidos los elementos del tipo penal de complicidad de asesinato y asociación de malhechores, del hecho que se le imputa, sin embargo, examinado el fundamento jurídico del rechazo al medio *ut supra* analizado, se comprueba que el ejercicio silogístico para subsumir el hecho al derecho, encaminados por él *a quo*, e inferir, como resultado de ello, las consecuencias jurídicas que permitieron condenar al hoy recurrente Domingo Capellán Fernández, en torno al tipo penal de complicidad de asesinato y asociación de malhechores, fue realizado conforme advierte la normativa procesal penal; aspectos correctamente asumidos por la Corte *a qua*, lo cual no avista contradicción; razones suficientes para desestimar el presente medio, y consecuentemente el recurso de que se trata;

En cuanto al recurso de Antonio Agustín Cornelio Capellán:

Considerando, que el único motivo de casación presentado por el recurrente Antonio, se circunscribe en endilgar a la decisión de la Corte *a qua* dos supuestos vicios, a saber, sentencia manifiestamente infundada y falta de motivación;

Considerando, que para sustentar el aspecto relativo a que la sentencia de la Corte es manifiestamente infundada, el recurrente argumenta que no tenía ningún problema con el occiso sino mas bien con familiares de este último, que dichas aseveraciones fueron demostradas por los testigos a cargo Ivelisse del Carmen Roque y Estefani Esbangelina Delgado Bueno y planteadas a la Corte *a qua* pero que esa Alzada lo inobservó;

Considerando, no lleva razón el recurrente en sus alegatos, toda vez que, esta Sala, ha de observar que la Corte *a qua* para fallar sobre lo cuestionado, tuvo a bien referir que las pruebas de la acusación destruyeron su presunción de inocencia, al comprobarse su participación activa en los hechos perpetrados, como el autor de dar muerte al ciudadano Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo, previo a sufrir las heridas de arma blanca producidas por el imputado Domingo Capellán Fernández;

Considerando, que si bien las testigos Ivelisse del Carmen Roque y Estefani Esbangelina Delgado Bueno aluden ante el tribunal de juicio que habían problemas anteriores entre el imputado Antonio y familiares del occiso, no menos cierto es que tales aseveraciones no dejan de lado los señalamientos e imputaciones aludidas por esas testigos, siendo esos argumentos irrelevantes para lo que en la realidad jurídica del presente caso se consumó, máxime cuando esas testigos, señalan e individualizan al recurrente en el evento acaecido, declaraciones interpretadas en su verdadero sentido y alcance, y jurídicamente refrendadas por la Corte *a qua*; lo que nos permite rechazar el presente aspecto;

Considerando, que cabe agregar que respecto a la valoración de la prueba testimonial, es criterio sostenido por esta Corte de Casación, que el juez idóneo para decidir sobre la misma, es aquel que tiene a su cargo la inmediatez en torno a ella, aspecto que escapa al control casacional, salvo la desnaturalización de dichas pruebas, lo que no ha tenido lugar en el caso que nos ocupa, en razón de las declaraciones vertidas ante el tribunal sentenciador fueron interpretadas en su verdadero sentido y alcance;

Considerando, que finalmente indica el recurrente que estableció a la Corte *a qua* la modificación de la pena impuesta y calificación jurídica de asociación de malhechores y asesinato, por la de homicidio excusable atendiendo a la falta de pruebas que demuestren la premeditación y la asechanza;

Considerando, que examinado el contenido del reclamo propuesto por el recurrente, esta Sala puede comprobar que el mismo, fue invocado en las conclusiones presentadas ante la Corte *a qua* durante el conocimiento del recurso de apelación, y que si bien se advierte que la Alzada confirma la decisión del tribunal de juicio, lo hizo en razón de la certeza extraída de las declaraciones de los testigos y del cumulo probatorio correctamente valorado, cumpliendo con lo establecido por la ley; no obstante, tal como lo reclama el recurrente, la Alzada no se refirió a la solicitud de modificación de la pena y la calificación jurídica; que sobre este particular, dado que el contenido del reclamo versa sobre un punto que por ser de puro derecho puede ser suplido por esta Corte de Casación, tal como procederemos a realizar;

Considerando, que contrario a la denuncia del recurrente, la lectura de la decisión impugnada pone de manifiesto que la Corte *a qua*, al confirmar lo decidido en primer grado, donde se retuvo responsabilidad penal por asociación de malhechores y asesinato, lo hizo por considerar que los medios probatorios, esencialmente las declaraciones testimoniales, pudieron ubicar e individualizar a la persona del hoy recurrente Antonio en el ilícito colegido, además de manifestar de manera coherente, precisa y sin duda las circunstancias previas al evento, que permitieran al recurrente, junto a Domingo Capellán Fernández, dar seguimiento y consecuentemente ultimar a Miguel Antonio Abreu (a) Pirulo; que de tales aseveraciones y de los aspectos allí ponderados y valorados, es evidente que en la especie, no se daban las condiciones fijadas por la jurisprudencia para retener la figura de excusa legal de la provocación;

Considerando, que por las pruebas aportadas se determinó que las circunstancias fácticas que configuran los elementos constitutivos de la excusa legal de la provocación, no se presentaron, como bien se infiere del ejercicio valorativo realizado por el tribunal de primer grado y refrendado con razonamientos suficientes y lógicos por la Corte *a qua*, dándole a los hechos, la correcta interpretación a las disposiciones que amparan la calificación jurídica de asociación de malhechores y asesinato; razón suficiente para rechazar la petición;

Considerando, que con relación a la excusa atenuante de la provocación, la aplicación de esta figura es una cuestión de hecho que queda a la apreciación de los jueces del fondo, y el tribunal superior tiene el deber de examinar el razonamiento dado en la decisión para determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada; en tal sentido, esta Alzada pudo comprobar que no existen los presupuestos necesarios que dieran al traste con la aplicación de la excusa legal de la provocación estipulada en el artículo 321 del Código Penal Dominicano; en ese sentido, procede

rechazar este medio, supliendo la omisión de la Corte a-quá, por tratarse de razones puramente jurídicas, y consecuentemente desestimar el recurso de que se trata;

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados en los medios objeto de examen, en consecuencia procede el rechazo de los recursos de casación que se trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida;

Considerando, que las disposiciones del artículo 438 del Código Procesal Penal, párrafo 1, dispone que: *"Si el condenado se halla en libertad, el ministerio público dispone lo necesario para su captura sin trámite posterior, con la obligación de informar al Juez de la Ejecución en las cuarenta y ocho horas"*;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal, emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta Alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: *"Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente"*; que procede eximir a los recurrentes Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán del pago de las costas del procedimiento por estar asistidos por abogados de la defensa pública.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán, contra la sentencia núm. 203-2018-SEN-00401, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 15 de noviembre de 2018, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Exime a los recurrentes Domingo Capellán Fernández y Antonio Agustín Cornelio Capellán del pago de las costas generadas por estar asistidos de la Defensa Pública;

Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, para los fines correspondientes.

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta. César José García Lucas. Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que certifico.